

## ACTA DE DELIBERACIÓN RIT 148-2023

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

Esta Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, reunida después del debate de rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal, ponderando todas las pruebas rendidas consistente en prueba testimonial, documental, pericial y otros medios de prueba, conforme al artículo 297 del mismo cuerpo normativo, ha arribado por la unanimidad de sus integrantes a las siguientes conclusiones:

### **1. Antecedentes Generales:**

A. Que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusaron a los imputados **EDUARDO GREGORIO GORDON VALCÁRCEL** y **MARCELA ALEJANDRA CUEVAS MUÑOZ**, por el delito de malversación de caudales públicos y/o efectos públicos del artículo 233 N°3 en relación con el artículo 238 parte final, ambos del Código Penal, en carácter de consumado, ya que los mencionados acusados, durante el periodo comprendido entre los años 2010 a 2011, en el ejercicio de sus respectivos cargos públicos, sustrajeron y consintieron la sustracción reiterada de caudales y/o efectos públicos, por una suma aproximada de \$75.479.839.-, la que se destinó a fines no institucionales, como son la compra de especies, regalos y obsequios así como atenciones realizadas con motivo de cumpleaños, fiestas de navidad, de enlaces, donaciones y festividades varias, siendo gastos improcedentes y no institucionales, **no coincidentes con el objeto de los gastos de representación, protocolo y ceremonial**, conforme ordena el Decreto N° 854 del año 2004 del Ministerio de Hacienda.

B. Que Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.

La institución está presidida por un General Director, del cual, a la época de los hechos juzgados en este juicio, dependía una Secretaría General, la que a su vez estaba conformada por diversos departamentos, entre ellos el de Relaciones Públicas que tenía como misión y finalidad velar por la imagen interna y externa de Carabineros, como también coordinar y dictar las normas de las actividades protocolares y gestionar las ceremonias en que esté involucrada la institución y su General Director.

El Departamento de Relaciones Públicas se encontraba a cargo de un Jefe de Departamento y conformado por una Sección Administrativa y de Adquisiciones, una Sección de Protocolo y una Sección de Relaciones Internas.

C. Que desde junio de 2008 a septiembre de 2011, se desempeñó como General Director de Carabineros Eduardo Gordon Valcárcel. Asimismo, entre septiembre de 2009 y diciembre de 2012 se desempeñó como Jefe del Departamento de Relaciones Públicas el Coronel de Carabineros Jorge Serrano

Espinoza (ya condenado por estos hechos). De igual manera, entre los años 2007 y 2014 se desempeñó a cargo de la Sección Administrativa la Capitán y luego Mayor Marcela Cuevas Muñoz.

D. Que, al Departamento de Relaciones Públicas, se le asigna anualmente un presupuesto destinado a todas las actividades protocolares, de representación y ceremonial de la Institución de Carabineros de Chile. Estos gastos de representación, protocolo y ceremonial están descritos en el Decreto supremo 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda, específicamente en el Subtítulo 22, ítem 12 asignación 003, que señala que “Son los gastos por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos en representación del organismo”.

En cuanto a la forma en que pueden ser utilizados, la misma norma expresa que *“Con respecto a manifestaciones, inauguraciones, ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios que se otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes solo podrán realizarse con motivos de celebraciones que guarden relación con las funciones del organismos respectivo y a los cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o del Ministerio correspondiente. Comprende además otros gastos por causas netamente institucionales y excepcionales que deban responder a una necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo organismo.”*

## **2. En relación a la auditoria efectuada al departamento IV de Carabineros por la Contraloría General de la República. (CGR)**

A. Que en el año 2011, se llevó a cabo por la CGR una auditoría financiera de los gastos del Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de Carabineros, que era el encargado, a la época, de controlar las operaciones financieras contables de las altas reparticiones de la Dirección General, puesto que este departamento llevaba las cuentas corrientes de Carabineros que manejan el presupuesto fiscal, siendo lo fundamental de la auditoria revisar los gastos del subtítulo 22 del Decreto Supremo 854 del Ministerio de Hacienda.

Conforme al Preinforme de observaciones N°97-2011, de 27/05/2011, sobre auditoría efectuada en el Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de Carabineros de Chile, junto a sus anexos N°1, 2, 3, y 4, incorporado mediante la exhibición del **documento 31.2** se estableció como objetivo, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad del Departamento IV. En cuanto a la metodología, el examen se desarrolló de conformidad con los principios, normas y procedimientos de control aprobados por esa entidad fiscalizadora, incluyendo por lo tanto una evaluación de control interno, el análisis de los registros y documentos, como la aplicación de otros medios técnicos. En cuanto al universo y muestra, de acuerdo a los antecedentes recopilados, el monto de los gastos en el periodo sujeto a examen ascendió a \$3.826.304.373, comprendiendo dicho periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2010.

La muestra examinada se seleccionó aleatoriamente, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%. Procedimiento que dio como resultado un valor ascendente a \$1.734.076.499 pesos, equivalente al 45% del universo antes citado.

En el documento se señala, que el Departamento IV tiene como objetivo general, contabilizar y controlar todas las operaciones financieras y contables que desarrollen las altas reparticiones dependientes de la Dirección General, para optimizar sus registros y proceder a entregar información fidedigna a todos los organismos, internos o externos, que la utilicen en sus procesos de toma de decisiones. A su vez, tiene como misión asesorar y apoyar a las señaladas reparticiones en todos los procesos financieros contables que deben desarrollar, coadyuvar en las adquisiciones, en la entrega oportuna de recursos para el normal funcionamiento y a cumplir con los requerimientos administrativos solicitados en forma oportuna y eficaz.

El informe indica que de este departamento dependen 12 reparticiones, entre ellas, la Dirección General de Carabineros, Subdirección General y la Dirección de Finanzas.

Como resultado del examen practicado, se determinaron ciertas observaciones, que fueron plasmadas en el mismo documento y, que en lo relativo a este juicio, se refiere, en lo pertinente a: II. Examen de cuentas. Gastos de representación improcedentes. Señalándose que el Departamento de Relaciones Públicas efectuó pagos con cargo a la cuenta gastos de representación por concepto de presentes o atenciones realizadas con motivo de cumpleaños, de fiestas de navidad, de enlaces, donaciones y festividades varias, gastos que no se condicen con la normativa vigente sobre la materia, toda vez que se advierte que no guardan relación con las funciones del organismo y tampoco responden a una necesidad de exteriorización de la presencia del servicio. (Aplica dictámenes de la CGR número 11.315 de 1985 y 10.449 de 2009.) Señalándose en el Anexo 1 de dicho informe la lista de gastos improcedentes, los que ascendieron a \$21.703.191, todos ellos pagados desde la cuenta corriente N° 9004165, del Banco Estado, de Carabineros de Chile denominada Giros Globales del Departamento IV.

El ya mentado pre-informe de observaciones, fue remitido al Jefe del Departamento IV y recibido el 30 de mayo de 2011 por esa repartición.

De acuerdo a lo señalado por las testigos **Paulina Lagos Muñoz**, **Lorena Alvarado Maldonado** y **María Soledad Viñuelas Araos**, todas fiscalizadoras de la CGR que tuvieron intervención en la elaboración de la auditoría realizada, luego de la notificación del pre informe, Carabineros de Chile tenía un plazo para efectuar los descargos correspondientes en relación a las observaciones formuladas, lo que se realizó mediante el Oficio N° 74 de 17 de junio de 2011, del Departamento IV, que informa y remite descargos en relación a las observaciones detectadas, el que fue suscrito por Henry Ganga Villagrán. En lo referente al examen de cuentas, en cuanto a la observación por los gastos de representación improcedentes, se indicó que efectivamente, el servicio procedió a pagar un conjunto de facturas con cargo a gastos de representación, todo lo cual se originó por el desconocimiento de las normas en detalle que regulan esta materia, como asimismo de los dictámenes que sobre el particular la Contraloría General de

la República ha emitido. Por lo anterior, constituyendo la observación realizada un hecho relevante y altamente sensible a la imagen institucional, considerando el máximo apego a las normas, en su contexto general del actuar que debe proyectar la institución, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas –Coronel Jorge Serrano Espinoza- reintegró los recursos observados por un monto de \$21.703.191 pesos, los cuales ingresaron a la cuenta corriente número N° 9004165, Giros Globales Dirección General de Carabineros.

Luego de los descargos se elaboró el informe final por la CGR, mediante el Oficio N° 050912, DAA N°1364/2011, de fecha 12/08/2011, al señor General Director de Carabineros de Chile que remite Informe Final N°97 de 2011 sobre auditoría efectuada en el Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de Carabineros de Chile, suscrito por María Isabel Carril Caballero, abogada Jefe de Dirección Auditoria Administrativa.

En la parte pertinente, en lo que se refiere a las observaciones efectuadas en el punto II. Examen de cuentas, 1. Gastos de representación improcedentes, se indica, que en atención a lo señalado por la autoridad del Servicio y la medida de reintegro efectuada, se procede a levantar la observación formulada en este acápite. No realizándose por parte de la CGR ninguna denuncia ante el Ministerio Público por estos gastos improcedentes.

En relación a este reintegro, se ventiló en este juicio la existencia de un préstamo efectuado al Coronel Jorge Serrano Espinoza que precisamente posibilitó la devolución de los montos objetados, señalándose, que estos montos los obtuvo el Coronel Serrano mediante la obtención de un préstamo que le otorgó la Dirección de Acción Social dependiente del Departamento de Bienestar de Carabineros, de manera irregular. A este respecto, entre otros testigos, declaró **Jorge Iván Bohle Barahona**, quien entre los años 2010 y 2011, se desempeñaba como jefe del Departamento de Acción Social, dependiente de la Dirección de Bienestar, el cual tenía como propósito efectuar préstamos de auxilio, préstamos extraordinarios al personal de Carabineros socios de la Dirección de Bienestar, que tenía como director al general Marcos Tello Salinas.

Respecto al procedimiento de préstamo de auxilio extraordinario indicó, que se recibían peticiones de todo Chile; cuando la solicitud era superior a 7 millones de pesos, era analizada y aprobada por el Honorable Consejo que funcionaba una vez al mes, mientras que en el tramo inferior, respecto de aquello que no autorizaba el referido consejo, señaló que lo conocía él como jefe del Departamento de Acción Social, con el Consejo Técnico.

Añadió que, en su carácter de jefe del departamento de acción social, tomó conocimiento en el año 2011 de un préstamo de auxilio extraordinario solicitado por el entonces Coronel Jorge Serrano Espinoza, ya que éste concurrió personalmente al departamento de acción social, y se entrevistó con él. Serrano solicitó cerca de veinte millones de pesos, indicando solo que lo necesitaba de forma urgente, sin que le preguntara a este para que era el dinero.

Respecto a la forma en cómo se tramitó dicho crédito, refirió que dado que se trataba de un préstamo de tipo urgente, no lo dudó, y accedió a

tramitar su solicitud, trámite que duró una semana desde que se hizo la petición, hasta que se entregó el cheque. Para ello, debió llenar el formulario de la solicitud de préstamo, sesionando de forma extraordinaria como Consejo Técnico, sin pasarlo al Honorable Consejo, en virtud de la premura del tiempo, resaltando que no existió otro préstamo similar por una suma superior a los veinte millones de pesos, sin pasar por el Honorable Consejo.

Esta solicitud de crédito debía acompañarse junto a otros antecedentes, tales como seis avales, tres de los cuales debían contar con más de 20 años de servicio, además de una fotocopia del carnet de identidad, su planilla de sueldo para poder verificar el estado actual de la liquidación de remuneraciones que recibía el funcionario.

El testigo **Bohle Barahona** agregó que el tiempo que se demoró en aprobarse el crédito, fueron dos días, destacando que esta rapidez se debió a que en el año 2010 fueron citados a la Dirección General, por el General Director Gordon, los componentes de los departamentos de la Dirección de Bienestar, señalándoles Gordon que **“a los funcionarios que se desempeñaban en la Dirección General se le debía dar prioridad por trabajar directamente con el mando superior”**, por ello cuando el Coronel Serrano solicitó el crédito, se reunió con los demás miembros del Consejo Técnico, recordándoles que ese era el motivo por el que iban a sesionar de forma extraordinaria, para ver la factibilidad de si se le aprobaba o no el préstamo al coronel Serrano, sin que él hubiese informado el otorgamiento del crédito al Honorable Consejo.

En base a la declaración de este testigo y otros que declararon al respecto, más los documentos acompañados, se pudo establecer por el Tribunal, que a este préstamo otorgado al Coronel Serrano, **se le dio una tramitación más rápida que la habitual, y con menores requisitos que los exigidos por las mismas disposiciones del departamento de Acción Social.**

Asimismo, en relación al préstamo obtenido por Jorge Serrano, se acreditó que el imputado Gordon le restituyó al anteriormente señalado, los fondos con los cuales reintegró los gastos improcedentes observados por CGR. Así se incorporó el **documento N° 8** consistente en la copia del depósito a la vista no endosable N° 171933-5 del Banco de Chile, de fecha 21/06/2011, en beneficio de Jorge Alejandro Serrano Espinosa, por la cantidad de \$21.703.000, junto al detalle de datos del producto que dan cuenta del tomador Eduardo Gordon Valcárcel.

Explicó Gordon en estrados que se reunió con Serrano, le dijo que se hacía responsable solidariamente de los montos objetados, porque eran regalos entregados por él, señalando que consideraba injusto que el pagara si el regalo lo entregó el Director de Carabineros y a nombre de la institución.

### 3. Denuncia del año 2017.

A. En el año 2017, mientras el Ministerio Público investigaba el llamado “mega fraude de Carabineros”, conforme a lo señalado por el testigo **Tulio Muñoz Fuentes**, Coronel del departamento OS7, algunos involucrados en esa investigación se refirieron a irregularidades ocurridas a propósito de la auditoría del año 2011 ya referida. Se procedió a examinar los antecedentes, determinándose que estos hechos no eran parte de dicha investigación; sin

perjuicio de ello, se continuó con la indagatoria, la cual en un primer momento solo se refirió al periodo observado por la CGR, pero posteriormente se amplió a todos los gastos efectuados por este motivo en los años 2010 y 2011.

**A.1** Previo a continuar con el análisis de la investigación realizada desde el año 2017, es importante referirse al tema de los gastos en compras y otras actividades efectuadas por el Departamento de Relaciones Públicas con cargo a los fondos de representación y protocolo.

Como ya se señaló anteriormente, conforme a toda la prueba rendida, se pudo determinar que cada año al Departamento de Relaciones Públicas se le asignaba en el presupuesto de Carabineros un monto específico para ser utilizado en gastos de protocolo. Ese dinero lo mantenía físicamente el Departamento IV, por lo que para realizar el gasto, en cuanto a lo discutido en este juicio; se podía hacer de dos maneras, a saber, primero, mediante órdenes de compra que se llevaban a ciertos proveedores que entregaban sus productos o prestaban sus servicios emitiendo una factura pagadera a 30, 60 o 90 días, que luego de adquirido el producto o servicio, la persona a cargo de la adquisición la llevaba al Departamento de Relaciones Públicas, en el cual existía una persona a cargo de su tramitación ante el Departamento IV, el cual era el encargado del pago; otra forma en que se verificaban estos gastos, consistía en que en ciertas oportunidades, el Departamento IV otorgaba al Departamento de Relaciones Públicas anticipos por gastos protocolares de fondos por rendir; posteriormente estos gastos eran rendidos mediante el envío de las boletas o facturas de los productos o atenciones en que se utilizaron los fondos.

En ambos casos, tanto se tratara de facturas como de boletas, se debía realizar por el Departamento de Relaciones Públicas una “constancia” ya fuera en el reverso de la factura o en una hoja en que se pegaba la boleta, constancia en que se indicaba que el Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, certificaba que el producto o la atención que figuraba en la factura o boleta, fue recibido conforme en calidad, cantidad y precio y entregado o brindado en nombre de Carabineros de Chile a una determinada persona o institución y el motivo de estos. Una vez que se firmaba la constancia, en el caso de las facturas por compras a plazo, estas se tramitaban en el Departamento IV para su pago y, en el caso de las boletas, se rendía cuenta de ellas, también previa constancia, las que eran firmadas, en los años a los cuales se refiere este juicio, por el Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, Coronel Jorge Serrano Espinoza y por la entonces Capitán de Carabineros Marcela Cuevas Muñoz.

**B.** Continuando con la investigación realizada desde el año 2017, los testigos **Tulio Muñoz Fuentes** y **Nayade Madrid Vargas**, indicaron que, en su indagación, en un principio comenzaron a corroborar si las especies o atenciones de los gastos objetados por CGR, habían sido recibidos por las personas a los que se referían aquellas, así emitieron los informes N° 306 de 1 de marzo de 2018 y el N° 1484 del 13 de septiembre de 2018. En ellos se tomaron declaraciones y se realizaron diligencias para establecer la ubicación, corroborando si las especies llegaron a manos de las personas que se señalaba en la constancia, determinando que productos por un valor cercano a los \$12.000.000, no llegaron a manos de las personas que señalaban

tales certificaciones, estableciéndose además que se entregaron a enlaces matrimoniales, dos de los cuales eran familiares del general Gordon.

La misma investigación arrojó por ejemplo, que 10 lavadoras adquiridas para la Teletón, nunca llegaron a su destino, según lo afirmado por la Directora y el Presidente Ejecutivo de dicha entidad.

Explicó el testigo Tulio Muñoz, que en un primer momento solo investigaron lo observado por CGR, pero que después se amplió la investigación a otros regalos y gastos con cargos a fondos de representación y protocolo también comprendidos entre los años 2010 y 2011, advirtiendo que varios funcionarios de Carabineros dijeron que en actividades de fin de año les entregaban regalos como hornos eléctricos, sábanas y otros y, que también en el mes de diciembre se compraron licores en Comercial El Cielo para una actividad de camaradería, lo que de acuerdo a la normativa, no se podía hacer con esos recursos.

En tal sentido, estos informes confirmaron la existencia de otras compras como juegos de cuchillería, sabanas y toallas, las que en general se produjeron a fines del mes de diciembre, lo que era conteste con las declaraciones de los funcionarios que dijeron que se verificaron celebraciones de fin de año y se hicieron regalos como juegos de sabanas, microondas y otros, siendo estos funcionarios parte del Departamento de Relaciones Públicas, de la Secretaria General y de la Dirección General de Carabineros.

Finalmente los investigadores realizaron el Informe 195 de 27 de enero de 2020, que abarcó todos los montos de regalos y atenciones que no correspondían a gastos de representación y protocolo durante el año 2010 y 2011, concluyendo que el monto por regalos y atenciones no recibidas por los supuestos beneficiarios o que no correspondía realizar con cargo a estos fondos, alcanzó a la suma de \$53.667.667, lo que sumado a los gastos observados por la CGR, alcanzó la suma total de \$75.479.839.

#### **4. Gastos objetados y constancias.**

A. Que efectivamente de acuerdo a la prueba rendida, principalmente documental y de testigos, se pudo establecer en juicio que los regalos, obsequios y atenciones contenidas en la acusación no corresponden a gastos de representación, protocolo o ceremonial conforme lo indicado en la asignación 003, del ítem 12 Capítulo 22 del Decreto 854 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, gastos observados, en parte por la CGR en su auditoria del año 2011, y también gastos resultantes de la investigación llevaba a cabo por el Ministerio Público desde el año 2017.

Asimismo, se pudo determinar que una gran parte de los regalos y atenciones que ahí se indican, **no fueron recibidos por las personas** señaladas en las constancias que figuran en las facturas o boletas correspondientes, acreditándose que algunos de ellos fueron recibidos por funcionarios de Carabineros que trabajaban en la Dirección General para navidades, aniversarios, cumpleaños u otros y, también conforme a lo señalado por el testigo **Enrique Antonio Mora Muñoz**, algunos de dichos regalos se enviaban a personas cercanas al General Director, lo que dicho testigo registró en una planilla personal, conforme consta en otros **medios de prueba 27**.

**B.** En cuanto a las constancias: Se ha señalado por parte de los acusadores que todas ellas serían idénticas, pero el Tribunal al analizar los documentos, ha podido verificar que esto no es así, que en algunas de ellas, luego de la descripción referida al presente o atención de que se trata y a quién se le entregó en nombre de Carabineros, se contiene la frase *“conforme a lo ordenado por el Alto Mando institucional y de acuerdo con las funciones propias de esta repartición”* y, que en otras, esta oración no está incluida, lo cual es un tema esencial al momento de salvaguardar el principio de congruencia que rige nuestro sistema procesal penal, puesto que en las acusaciones objeto del juicio, ambos acusadores indicaron que la manera de ocultar el delito, era precisamente mediante constancias mendaces que llevaban las palabras antes señaladas, lo cual obliga a estos sentenciadores a no extenderse respecto de todas aquellas operaciones en cuya constancia, no figure que aquellas compras fueron ordenadas por el alto mando institucional ya que el artículo 341 del Código Procesal Penal, impide excederse de los términos en que fue formulada la acusación.

Así las cosas, el tribunal, solo analizará la existencia o no del delito por el cual fueron acusados los imputados, en dichas operaciones en que en sus respectivas constancias se señale la frase *“conforme a lo ordenado por el alto mando institucional y de acuerdo con las funciones propias de esta repartición”* según la siguiente enumeración:

1. Documento **31.6.112** Factura número 41727 de Cristian W. Tala Manríquez, de fecha 27 de diciembre de 2010, detalle 100 cajas de madera grabadas con dos botellas, monto total de la factura \$2.999.990. Constancia de 27 de diciembre de 2010.

2. Documento **31.6.121**, Factura número 0013477 de Michael Kurasz y Cia Limitada, Pastelería Condi, de fecha 27 de diciembre de 2010, descripción 100 Canastos Regalo Navidad, \$2.100.000. Constancia de 27 de diciembre de 2010.

3. Documento **31.6.126** Factura N° 0099891, Distribuidora El Cielo, Distribución y Comercialización de Bebidas alcohólicas y analcohólicas de fecha 28 de diciembre de 2010, detalles diversos licores y bebidas, \$ 1.168.440. Constancia de 28 de diciembre de 2010.

4. Documento **31.6.4** Factura N° 711722 de Falabella Retail, de fecha 12 de mayo de 2010, por \$29.990. Constancia de 10 de mayo de 2010.

5. **Otros medios de prueba 46:** Factura 051355 Agendas y Artículos de Cuero Fontet S.A., de fecha 20 de diciembre de 2010, detalles 10 maletines especiales de Cuero, \$1.320.900. Constancia de 30 de diciembre de 2010.

6. **Otros medios de prueba 46:** Factura N° 001349, de Falabella Retail, de fecha 2 de febrero de 2010, detalle Microondas Somela, total \$49.900, Constancia de 3 de febrero de 2010.

7. **Otros medios de prueba 46:** Factura N° 658283, de Falabella Retail, de fecha 2 de febrero de 2010, detalle “Serv. De plaqué con estuche”, total \$65.000. Constancia de entrega al enlace de Alejandra Alarcón Miranda y Cristóbal Socías Vargas, de 3 de febrero de 2010.



8. **Otros medios 46:** Factura N° 658293, de Falabella Retail, de fecha 2 de febrero de 2010, detalle Frigobar GE 50 Lt, total \$69.900. Constancia de 3 de febrero de 2010.

9. Documento **31.6.73:** Factura electrónica Falabella N°840886, de fecha 12 de noviembre de 2010, detalle base de plumas King, \$69.990, con constancia de entrega al enlace de María Carolina Peirano Pechenino y Ernesto Passalacqua Widmer, de 15 de noviembre de 2010.

10. **Otros medios 46:** Boleta 16203, de Flores Cartagena, de fecha 17 de enero de 2010, \$120.000. Constancia de 18 de enero de 2010.

11. Documento **31.6.118,** Factura número 001926, de María Clemencia González Donoso, Comercializadora de Artículos de Oficina de Escritorio y Artesanía, de 27 de diciembre de 2010, detalle es un set de pingüinos Lapislázuli plata en estuche de terciopelo, total \$568.820. Constancia de 28 de diciembre de 2010.

12. Documento **31.6.137** Factura Falabella Retail 918430, de 3 de marzo de 2011, descripción H. Micro Thomas, total \$69.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace Michelle Cartier Zamudio y Octavio Henríquez Salazar, de 7 de marzo de 2010.

13. Documento **31.6.139** Factura Falabella Retail 918431, de 3 de marzo de 2011, descripción H. Micro Thomas, total \$69.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace María Angélica Álvarez Aravena y Santiago Pérez Schuler, de 7 de marzo de 2010.

14. Documento **31.6.140** Factura Falabella Retail 918432, de 3 de marzo de 2011, descripción Aspiradora Somela, total \$62.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace de Juan Cristóbal Rikli y Camila Valenzuela Bejares, de 7 de marzo de 2010.

15. Documento **31.6.142** Factura Falabella Retail, de 14 de marzo de 2011, descripción Plumón Pluma Premium King, total \$59.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace Paulina Castellón Valdivieso y Cristian Rodríguez Rodríguez, de 15 de marzo de 2010. **(Así dice en la constancia).**

16. Documento **31.6.96** Factura 12673, Marcela Fernandez, de fecha 9 de diciembre de 2010, descripción juegos de toallas y sábanas, total \$ 226.695 con constancia de 11 de diciembre de 2010.

17. Documento **31.6.79** Factura Falabella Retail, de 19 de noviembre de 2010, descripción 10 Lavadora secadora Daewo, total \$3.999.900, con constancia de 30 de noviembre de 2010.

18. **Otros medios 46:** Boleta de Falabella Retail, por \$151.980, con constancia de que la cuchillería fina que da cuenta la boleta, fue entregada a nombre de Carabineros de Chile al enlace Manuel Vivar Vicencio y Pamela Pérez González, de 24 de diciembre de 2010

19. **Otros medios 46:** Factura Falabella Retail, N°671942 de 3 de marzo de 2010, descripción juego de cuchillería, total \$144.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace Fernando Sarabia Barrie y María José Larraín Matte, de 4 de marzo de 2010.

20. **Otros medios 46** Factura Falabella Retail, N°671943 de 3 de marzo de 2010, descripción Aspiradora Thomas, total \$149.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace Paula Valech y Joaquín Godoy Ibáñez, de 4 de marzo de 2010.

21. Documento **31.6.76** Factura 9520 de Gina Cabello, de 23 de noviembre de 2010, descripción 68 Juegos de sábanas con colcha, total \$2.411.416, con constancia de 22 de noviembre de 2010.

22. **Otros medios 46**, Factura 144133, de HBC Briones, de fecha 18 de marzo de 2010, detalle una pluma y un lápiz Roller, total \$529.800, constancia de 6 de abril de 2010.

23. **Otros medios 46:** Factura 500555. De Cencosud Retail, de fecha 8 de abril de 2010, por el monto de \$359.970, con constancia de 12 de abril de 2010.

24. **Otros medios 46**, Factura 500556. De Cencosud Retail, de fecha 8 de abril de 2010, por el monto de \$195.080, con constancia de 12 de abril de 2010.

25. **Otros medios 46**, Factura 500557. De Cencosud Retail, de fecha 8 de abril de 2010, por el monto de \$515.889 con constancia de 12 de abril de 2010.

26. **Otros medios 46**, Boleta de Sodimac, de 11 de marzo de 2010, por \$119.990 con constancia de 18 de marzo de 2010.

27. **Otros medios 46:** Documento Factura Falabella Retail, N°962337 de 7 de mayo de 2011, descripción enceradora Somela, total \$59.990, con constancia de haber sido entregado a nombre de Carabineros de Chile al enlace Felipe Bunster Echeñique y Catalina Zabala Ferrer, de 8 de mayo de 2011.

28. **Otros medios 46**, Factura Falabella Retail, N°696211, de 16 de abril de 2010, descripción 10 juegos de set 6 vasos whisky, total \$34.900, con constancia de 20 de abril de 2010.

29. **Otros medios 46**, Factura Falabella Retail, N°696210 de 16 de abril de 2010, descripción 10 juegos de servicios de plaqué, total \$650.000, con constancia de 20 de abril de 2010.

30. Documento **31.6.146**, factura electrónica 948543, de Falabella Retail, de 15 de abril de 2011, descripción horno microondas Thomas, \$59.900 constancia que fue entregado en nombre de Carabineros de Chile al enlace Soledad Larraín Muñoz y Marcelo Ogas Sotomayor, de 18 de abril de 2011.

31. Documento **31.6.23**, factura electrónica 748026, de Falabella Retail, de 25 de junio de 2010, descripción LCD LG, \$279.990; constancia de 30 de junio de 2010.

32. **Otros medios 46:** Factura N°294 de Garnie, de 18 de marzo de 2011, descripción 15 maletines de cuero, total \$1.570.800, con constancia de 11 de marzo de 2011.

33. **Otros medios 46:** Factura N°290 de Garnie de 16 de marzo de 2011, descripción 28 porta trajes cuero negro total \$3.665.200, con constancia de 17 de marzo de 2011.

34. Documento **31.6.21**, factura electrónica 739799, de Falabella Retail, de 14 de junio de 2010, descripción vajilla, panera, almohada, frazada, plum y otros, total \$209.790; constancia de 15 de junio de 2010.

Todas ellas por un monto total de: **\$24.162.160 (equivalente a 639 UTM, considerando la época de cada adquisición o servicio)**

En tal sentido, la lista anterior da cuenta de que pese a su constancia, se acreditó que las especies entregadas no llegaron a sus destinatarios, o bien llegaron a destino, pero no correspondía imputarlo a gastos de representación, como ocurre respecto de los enlaces matrimoniales, o bien los receptores de dichos presentes no comparecieron a estrados, pero de todas maneras no correspondía imputarlos igualmente a gastos de representación, más cuando alguno de ellos fueron impugnados por la Contraloría General de la República en el año 2011.

Sin perjuicio de aquello, conforme los criterios señalados, se excluyó de la lista referida, los presentes consignados en el **otros medios 46**, Factura 052755, Instituto Geográfico Militar IGM; de fecha 30 de agosto de 2010, detalle 500 cuadernos con tapas dura \$1.200.000. Constancia de 31 de agosto de 2010, por cuanto según el testigo **Jorge Humberto Toro Beretta** los cuadernos pudieron haber llegado a destino, por su fecha no fueron impugnados por la Contraloría General de la República, y los mismos podrían subsumirse dentro de aquellos gastos tendientes a la exteriorización de la presencia del respectivo organismo.

C. Por otra parte la defensa de Cuevas Muñoz, señaló que no todas las constancias presentadas en juicio fueron firmadas por su representada. En este sentido, al hacer una revisión de los documentos signados en el acápite anterior, estos sentenciadores pudieron establecer que sólo una de las constancias, si bien aparece con el nombre de Marcela Cuevas, la firma estampada en ella, es claramente distinta de la firma de la acusada, esta es la incorporada en los **Otros medios de prueba 46**, referida a la Factura 51355 Agendas y artículos de cuero Fontet S.A. por un monto de \$1.320.900, constancia de 30 de diciembre de 2010, situación que es concordante con lo afirmado por la acusada y otros testigos que depusieron en estrados, en el sentido de que cuando ella estaba de vacaciones o con algún permiso, era reemplazada por otra persona en su cargo, por lo que a su respecto el análisis de los hechos se limitará al monto de \$23.241.260 **(equivalente a 604 UTM, considerando la época de cada adquisición o servicio)**

Asimismo, dicha defensa sostuvo que a su defendida no le correspondía responsabilidad por un conjunto de compras o servicios no contratados por ella, entre las cuales se cuenta el documento **31.6.126** Factura N° 0099891, Distribuidora El Cielo, Distribución y Comercialización de Bebidas alcohólicas y analcohólicas, señores de Dirección General de Carabineros, detalles diversos licores y bebidas, \$1.168.440. Constancia que

los licores, bebidas, vinos, cervezas y champañas que figuran en el anverso de la presente factura, fueron recibidos conforme en calidad, cantidad y precio y consumidas en manifestaciones oficiales de la institución. Entre paréntesis, atención proporcional al señor Presidente, agregado de Defensa y Militar Ecuador Coronel Don Rafael Coral Mera, directivos e integrantes de la Asociación y agregados militares y policiales extranjeros acreditados en nuestro país y familiares con motivo de reunión de camaradería por el término de las actividades de fin de año, conforme a lo ordenado por el alto mando institucional y de acuerdo con las funciones propias de esta repartición. Santiago 28 de diciembre de 2010. Dicha alegación no será oída por el Tribunal, debido a que, revisada toda la documentación relativa a esta operación, se puede observar que si bien no aparece que ella haya comprado las especies que allí se señalan, su firma aparece en la constancia respectiva.

Finalmente, la misma defensa señaló que tampoco se podían ingresar al análisis del Tribunal aquellas compras o servicios no expresamente descritos en el listado de operaciones señaladas en las acusaciones objeto del juicio. Sin embargo, dichas alegaciones serán desestimadas, puesto que, en ambos libelos acusatorios, tales listados aparecen precedidos de la expresión “entre otros”, lo cual denota que dicha enumeración no era taxativa y por ello no es correcto omitir su análisis a la hora del juzgamiento.

## **5. Gastos de Representación y Protocolo.**

Que como se señaló anteriormente, los recursos destinados a gastos de representación, protocolo y ceremonial, constituyen fondos públicos asignados anualmente en la Ley de Presupuesto del Sector Público a Carabineros de Chile, los que conforme a lo señalado en el subtítulo 22, ítem 12 asignación 003 del Decreto 854 del Ministerio de Hacienda, solo pueden ser utilizados, en la medida que se cumplan con dos requisitos copulativos: Que las actividades se realicen con motivo de celebraciones que guarden relación con las funciones del organismo respectivo y, a las cuales asistan autoridades superiores de Gobierno o del Ministerio correspondiente. La misma norma señala que en ciertos casos excepcionales, pueden ser gastos por causas netamente institucionales que deban responder a una necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo organismo.

En este sentido, no pueden utilizarse estos fondos para compras de regalos de cumpleaños, matrimonios, aniversarios, regalos o fiestas de navidad o de fin de año aun cuando sean de personas de la misma institución. Así lo ha establecido no solo el Decreto 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda sino también los dictámenes de la Contraloría general de la República, N° 011315 de 16 de mayo de 1985 y el N°10449 de 27 de febrero de 2009, documentos 31.4 y 31.5 ingresados a juicio, por lo que existe responsabilidad de quienes los usen para fines impropios o indebidos que puede perseguirse por la vía penal.

Igualmente, en lo que dice relación con regalos que excepcionalmente se entregaban por causas netamente institucionales que debían responder a una necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo organismo, se constata que ninguno de los casos señalados en la letra B del acápite 4 de

este veredicto, en lo que guarda relación con regalos hechos a personas o instituciones externas a Carabineros de Chile, cumple con ese requisito, desde que se hicieron a personas que invitaron personalmente al General Gordon a sus enlaces matrimoniales, o bien se hicieron sin que se haya acreditado la necesidad de exteriorizar la presencia de la Institución de Carabineros de Chile.

Así las cosas, quedó acreditado que en todas las operaciones referidas debidamente “constanciadas” y, que son objeto de análisis por parte del Tribunal, sus ejecutores no estaban autorizados por el ordenamiento jurídico para su realización, por lo que constituye una sustracción de fondos públicos, sancionada por la Ley.

## 6. Calificación Jurídica.

Como se ha venido razonando, las actuaciones de los acusados en juicio configuran para el Tribunal, el delito de Malversación de Caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233 N° 3 en relación al inciso final del artículo 238 del mismo cuerpo legal, en virtud del valor total de lo defraudado.

En este orden de ideas, el artículo 233 N° 3 en comentario sanciona; **“al empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos público en depósito, consignación o secuestro, los substraiga o consintiere en que otro los substraiga”**.

En tal sentido:

A. En primer lugar, en el caso de autos, nadie discute que los acusados eran empleados públicos, puesto que ambos a la fecha de los hechos que se imputan pertenecían a la institución de Carabineros de Chile, Eduardo Gordon con el cargo de General Director y Marcela Cuevas Muñoz con el rango de Capitán, lo que además quedó acreditado mediante la incorporación de sus respectivas hojas de vida funcionaria.

B. Tampoco, existen dudas, en relación a que en los hechos desde un punto de vista jurídico los fondos destinados a gastos de representación, protocolo y ceremonial son fondos públicos asignados a Carabineros de Chile a través de la ley de presupuesto y que se manejaban en la Cuenta Corriente de la Dirección General de Carabineros del Banco Estado N° 9004165 denominada de giros globales a cargo del Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Carabineros, lo que configura el objeto material del delito y que es uno de los elementos del tipo penal por el cual fueron acusados ambos imputados.

C. Luego, en relación a tener a su cargo caudales o efectos públicos, requisito fundamental para que se configure el delito de malversación ha de tenerse presente lo expuesto por el profesor Etcheberry quien señala que: *“Las disposiciones del Derecho Público, y particularmente del derecho Administrativo, serán las que determinen cuando los caudales o efectos estén al cuidado del funcionario por razón de su cargo. Será preciso que el funcionario desempeñe el cargo en alguna de las calidades que el Derecho Administrativo contemple en virtud de disposición legal o de formal nombramiento, y también que el cargo, dentro de las disposiciones legales o*

*reglamentarias vigentes, lleve consigo la custodia de los fondos malversados.”* (Delitos contra los intereses sociales, Etcheberry).

Por su parte la Corte Suprema en la causa Rol 38490-2017 señala en lo relativo a la expresión tener a su cargo que: *“el elemento normativo del tipo penal consistente en que los caudales o efectos públicos sustraídos estén a cargo del funcionario público, requiere que estén a su cuidado disposición o responsabilidad”*. De esta forma la jurisprudencia ha extendido el concepto de “tener a su cargo” estimando que basta que los fondos desde un punto de vista fáctico estén a disposición o bajo la responsabilidad del funcionario.

Es en este marco de ideas, es que se ha discutido en juicio si los acusados tenían a su cargo los fondos de representación, protocolo y ceremonial, pues ha sido a este ítem que los gastos procedentes de las facturas y constancias ya analizadas fueron imputados respecto del conjunto de dineros dispuestos por ley a Carabineros.

En este sentido, podemos señalar que al **Ex general Director de Carabineros Eduardo Gordon Valcárcel**, la ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, le entregaba un conjunto de atribuciones, una de las cuales estaba enumerada en el artículo 52 letra o) de dicha norma, que le otorgaba la facultad de *“Disponer la inversión de fondos que se destinen por ley a la Institución”*, dentro de los cuales por cierto, se encuentran los fondos de representación y protocolo. Por otra parte, la Orden General 1845 de 10 de noviembre de 2008 dictada por el propio acusado, indicaba a la sazón, que el **Departamento de Relaciones Públicas tiene como misión y finalidad velar por la imagen interna y externa de carabineros, como también coordinar y dictar las normas de las actividades protocolares y gestionar las ceremonias en que esté involucrada la institución y su General Director. Desde el punto de vista interno, el Departamento de Relaciones Públicas cumple la función de asesorar, dirigir, desarrollar y controlar la actividad en donde está involucrado el señor General Director de Carabineros, en conjunto con el alto mando institucional**. La misma orden general, disponía que el Jefe del Departamento de Relaciones Públicas, tenía entre otras labores, la función de **asesorar** al señor General Director de Carabineros y Alto Mando institucional, en todas aquellas materias o asuntos vinculados a sus relaciones y compromisos sociales o protocolar, además de *“administrar”* los gastos de representación del Sr. General Director de Carabineros en las tareas que le sean asignadas.

De todas estas normas, es claro para el Tribunal que el General Director, tenía normas legales y reglamentarias que lo ligaban directamente a los fondos destinados a la institución y que por ello, mantenía facultades de disposición de aquellos, atribución que, desde una perspectiva fáctica, en una institución altamente jerarquizada como lo es Carabineros de Chile, comprende, el poder de definir el destino de dichos fondos y por qué no afirmarlo, también respecto de determinar a qué partida presupuestaria imputarlos, para lo cual, contaba con las labores de asesoramiento del jefe del Departamento de Relaciones Públicas quien debía cumplir cabalmente las instrucciones del General Director, cuestión que como se verá, en los hechos operaba entre otras formas mediante la mentada pauta de saludos, no existiendo dudas que todo

el proceso, incluido el de imputación de los gastos, fue realizado bajo las instrucciones del propio acusado, quien además en estrados reconoció entre otras cosas, que una de las motivaciones que lo llevaron a restituirle los montos reintegrados por el Coronel Serrano, decía relación precisamente con que él tenía claridad de que se trataban de regalos entregados por él, respecto de lo que el propio General Gordon había definido como el “frente interno” de la institución, lo que como se verá tendrá consecuencias en la participación dolosa del acusado en el delito de marras.

D. En cuanto a la tipicidad, es dable señalar que este ilícito exige la sustracción de los caudales, y que conforme la doctrina, aquello busca sancionar *“lo que constituye una sustracción definitiva, sin devolución de caudales o efectos, es decir una lesión permanente al patrimonio público* (Delitos Contra la Función Pública Rodríguez y Ossandón).

En este sentido, puede decirse que en el presente juicio ha quedado asentado que hubo sustracción de caudales públicos, los que salieron de la esfera de custodia de la Institución para ser utilizados con fines distintos a los que estaban destinados. Por ello, resulta innecesario acreditar que los hechos se hayan apropiado personalmente de ellos incorporándolos a su patrimonio. Tampoco importa, que durante el juicio se haya confirmado que la mayoría de las constancias efectuadas en las facturas utilizadas para las compras de distintos productos o pago de distintas atenciones, no eran efectivas puesto que los regalos o atenciones ahí señalados no habían llegado al destinatario indicado en ellas, lo que no es relevante para configurar la existencia del delito, puesto que éste queda consumado por el solo hecho de destinar los fondos a fines que no corresponden a gastos de representación y protocolo, por lo que, la mendacidad de las constancias plasmadas en las facturas objeto del juicio, confirman que existía de una **puesta en escena dolosa**, destinada a ocultar el destino de las especies, realizada por los acusados con el objeto de dar una apariencia de legalidad a los gastos inadecuados que se ejecutaban con estos fondos.

## 7. Participación.

A. En cuanto a la participación del acusado Gordon Valcárcel, esta ha quedado acreditada por la misma prueba rendida en juicio; es así que los funcionarios Vallejos, Vargas, Burgos, entre otros, reconocieron que ellos recibieron durante el periodo en que Gordon Valcárcel era el General Director regalos para fin de año, por ejemplo un horno eléctrico. Todos ellos trabajaron en el Departamento de Relaciones Públicas, señalando que no solo se compraban regalos protocolares con el logo de la institución o del General Director, sino que también “regalos civiles” como camisas, zapatos, corbatas, vajilla, muchos de ellos entregados por cumpleaños o matrimonios. Asimismo, la funcionaria Rojas Oyaneder señala que, con posterioridad al terremoto del año 2010, hubo una ceremonia en que a los carabineros afectados le entregaron ayuda a través de la Corporación de Ayuda a la Familia que estaba a cargo de la Señora del General Gordon, como camas, lavadoras, refrigeradores.

Asimismo, el acusado no desconoce la existencia de la llamada Pauta de Saludos Protocolares, **documento 69.1** incorporado en juicio, la cual se confeccionaba por la sección de protocolo del mismo departamento de

Relaciones Públicas y se le presentaba mensualmente para su revisión, donde de su puño y letra indicaba a que personas se les debía enviar un saludo protocolar y a quienes un presente u obsequio a su nombre.

Por otra parte, en su misma declaración, Gordon indicó que las actividades dirigidas al personal eran una costumbre de la institución como fiestas de navidad, cumpleaños, matrimonios, nacimientos sobre todo en su entorno más cercanos, con el objetivo de motivar al personal y a sus familias. Por ello cuando se le dieron a conocer las observaciones efectuadas por la CGR, señaló que se debían solucionar a la brevedad posible porque no se podía aparecer ante la opinión pública con esta situación, posteriormente supo que las observaciones se habían levantado porque el jefe del departamento con su peculio reingresó el dinero para subsanar las observaciones, estimando que era injusto e incorrecto que un oficial subalterno, el Jefe del Departamento, estuviere cancelando gastos institucionales en los que había participación directa del General Director, y algunas veces los había entregado él, por lo que le restituyó el dinero involucrado a través de un vale vista, lo que se analizó anteriormente. De esta declaración es posible deducir que el mismo acusado sabía del mal uso de los fondos de representación, a lo menos, para los regalos y celebraciones del personal, llamados del frente interno. Por otra parte, aun cuando señaló que no sabía que los regalos de los matrimonios a los que fue invitado durante el periodo a que se refieren los hechos juzgados en el presente juicio, fueron pagados con fondos de gastos de protocolo, no existe ninguna prueba que acredite lo contrario.

En otro orden de ideas, al analizar las facturas y constancias que contienen la frase por **“orden del alto mando Institucional”**, los productos que en ellas dice que se adquirieron, se puede determinar que muchos de ellos coinciden con regalos que algunos funcionarios señalan haber recibido por fiestas de navidad o cumpleaños, como hornos eléctricos, sábanas, toallas, existiendo a mayor abundamiento el **otro medio de prueba 27** la lista de regalos del testigo Mora, en que tal como lo dijo el querellante en su alegato de clausura, coinciden diversos regalos comprados con los ahí señalados como regalos enviados por el General Director, por lo que el imputado no desconocía el origen de los fondos con los que estos presentes fueron adquiridos. Asimismo, dentro de dichas facturas y constancias, se encuentran los enlaces matrimoniales a los que fue invitado Gordon durante esa época, e incluso la testigo María José Larraín señaló que recibió el regalo de parte del General Gordon y, él con su señora, asistieron al matrimonio.

Conforme lo expuesto y teniendo en cuenta lo dicho por la defensa de Gordon Valcárcel particularmente en su réplica, no es cierto que las acciones del coronel Serrano hayan sido un mero error de imputación, toda vez que este tipo de gastos apartados de las directrices de la Contraloría General de la República eran improcedentes y por ello no podían ser imputados de manera correcta a ninguna de las partidas presupuestarias a cargo del coronel Serrano, en su calidad de jefe del Departamento de Relaciones Públicas, todo lo cual refuerza el actuar doloso del señalado acusado.

Es por ello, que todas la pruebas rendidas en juicio, concatenadas entre sí, de acuerdo a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, se estimaron suficientes para establecer su participación culpable y penada por la ley como autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal respecto al delito de



Malversación de Caudales públicos consagrado en el artículo 233 N° 3 en relación al artículo 238 del mismo cuerpo legal, en carácter de consumado.

B. En cuanto a la participación de la acusada Marcela Cuevas Muñoz, si bien, como se explicitará en el fallo, no hay antecedentes normativos para sostener que ella tenía a cargo los caudales que fueron malversados y, que además, el Tribunal está dispuesto a compartir con su defensa que dado su grado de Capitán y estando bajo jerarquía directa del Coronel Serrano, que su intervención en los hechos obedecía al cumplimiento de las órdenes de su superior, lo que es concordante con lo expuesto en las acusaciones, aquello bajo ningún respecto puede excluirla de tener participación dolosa en estos hechos, si bien no como coautora de los mismos como pretendía la parte querellante, sí como cómplice, tal y como lo sostuvo originalmente en su libelo acusatorio el Ministerio Público.

En este sentido, toda la prueba allegada al juicio discurrió respecto a que la Capitán Cuevas en su rol de jefa de la Sección Administrativa del Departamento de Relaciones Públicas, estaba a cargo de prácticamente todas las compras que fueron objeto del presente delito, así lo explicaron entre otros en estrados los testigos Bahamondes, Vallejos y Burgos, lo que también se evidencia tanto con las constancias firmadas por ella junto a su jefe, como asimismo con las facturas recibidas por la acusada. Es así que, para el Tribunal, no hubo dudas razonables de que la acusada tenía claridad de lo que hacía y, siendo como ella misma señaló, una oficial bien preparada con estudios en la Academia Superior de Carabineros, hace inverosímil que desconociera que realizando estas labores, cooperaba facilitando los medios para realizar actos ilícitos, por lo que no puede soslayar su responsabilidad penal, pues no hay antecedentes que den cuenta que ella en algún momento haya representado a sus superiores la ilegalidad de todo el proceso de adquisiciones de regalos y atenciones, ordenadas por el Alto Mando fuera de los fines consagrados en la ley, más cuando a propósito de hechos diversos, la propia acusada representó a su superior jerárquico su intención de ser trasladada de repartición, tal como resaltó en su réplica la parte querellante.

Por lo anteriormente señalado se descartará que la Capitán Cuevas haya actuado como autora facilitadora del artículo 15 N° 3 del Código Penal, pues la única diferencia entre esta figura y la del artículo 16 de nuestro Código Penal, dice relación con la exigencia de concierto previo entre los autores del ilícito, lo que en la especie a criterio de éstos sentenciadores no se probó, por cuanto no hubo antecedentes, ni testimoniales ni de ningún tipo que dieran cuenta de aquella comunión de voluntades que son el núcleo del concierto previo, sino más bien, toda la prueba aportada por los acusadores, apuntó a la realización de actos de cooperación por razones de carácter jerárquicos y funcionales de los cuales sólo puede desprenderse el actuar doloso de la imputada, pero no su concierto con sus superiores.

## **8. Rechazo de la prescripción de la acción Penal.**

Conforme a lo razonado precedentemente, se rechaza lo pretendido por la defensa de la acusada Marcela Cuevas, en orden a declarar prescrita la acción penal deducida, teniendo para ello en consideración que el artículo 94

del Código Penal establece que la acción penal prescribe respecto de los crímenes no contemplados en el primer párrafo, en 10 años, plazo que resulta aplicable en la especie, desde que la pena asignada al delito por el que serán condenados ambos encartados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 233 N° 3 y 238 del Código Penal, reúne tal característica, desde que parte -en abstracto- en presidio mayor en su grado medio. Lo razonado, lleva a desestimar lo dicho por la mentada defensa en orden a considerar individualmente cada uno de los hechos de sustracción de especies constitutivas de la malversación por separado, estableciendo respecto de cada uno el plazo de prescripción de las faltas o los simple delitos, ya que el tipo penal de malversación de caudales públicos considera para su configuración el valor total de la sustracción, esto es considerándolo como un solo delito, por lo que habiéndose suspendido el plazo de prescripción en el año 2017, se rechazará la petición señalada por la referida defensa.

## 9. Demanda Civil

Que sin perjuicio de haberse acreditado la existencia del delito de Malversación de Caudales Públicos y la participación de los encartados en este, el Tribunal no harán lugar a la demanda civil incoada, por cuanto la acción indemnizatoria se encuentra prescrita.

Para razonar de tal manera, ha de tenerse presente que si bien el artículo 2314 del Código Civil establece que *“el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, este artículo se debe entender conforme lo indicado por artículo 2332 del mismo cuerpo legal que indica que *“las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*, por lo que resulta necesario establecer, a fin de contabilizar el inicio del referido plazo de 4 años, tanto la fecha en que se verificó el delito de malversación de caudales públicos, así como la fecha en que se habría suspendido el plazo de prescripción referido.

En tal sentido, aun cuando se considere en favor de la demandante civil la fecha de la última sustracción acreditada - mayo del año 2011- para contabilizar el inicio del plazo de prescripción, el plazo para accionar civilmente venció en el mes de mayo del año 2015, sin perjuicio de lo cual, solo a partir del año 2017 se inició la investigación en contra de los demandados, con la posterior presentación de la querella y demanda civil por parte del Consejo de Defensa del Estado, lo que lleva a considerar, en este caso, que efectivamente operó la prescripción de la acción civil en favor de ambos.

Sin perjuicio de lo razonado, resulta necesario hacerse cargo de lo dicho por la demandante en orden a distinguir entre la producción del daño, que se verificó a propósito de la sustracción de dinero al erario público que se materializó mediante los actos constitutivos de la malversación y, cuando dicho daño, llegó efectivamente a conocimiento de la víctima, lo que a entender de la demandante se produjo en el año 2017, a propósito de la declaración de Flavio Echeverría en una investigación diversa, quien dio cuenta de la existencia de la fiscalización realizada en el año 2011 por la Contraloría General de la República, indicando en tal sentido que *“si la acción*

*aún no nace, escasamente podrá nacer el plazo para su extinción”, citando para ello diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que recoge tal afirmación.*

Pues bien, incluso si compartieran estos sentenciadores dicha premisa, resulta necesario establecer cuándo el Estado de Chile, representado por la querellante, tomó conocimiento del perjuicio sufrido, lo que a entender de estos jueces se produjo precisamente en el año 2011, a propósito de la fiscalización referida, ya que la Contraloría General de la República es una entidad estatal que realizó una auditoria al Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de Carabineros de Chile, cuyas observaciones se plasmaron en el pre informe N° 97 del año 2011, que pudo constatar la existencia de un perjuicio fiscal que cifró en una suma ascendente a \$21.703.000, el que incluso fue restituido al erario nacional, dando incluso cuenta dicha fiscalización, de la posibilidad que existieran otros casos además de los contenidos en el pre informe 97, ya que fue un análisis selectivo de solo una parte de los gastos realizados, sin que posteriormente se haya intentado acción alguna para determinar el total del perjuicio.

Es así, que la querellante, en su calidad de representante del Estado de Chile, no puede desconocer que otra entidad, también estatal -como es la CGR- ya en el año 2011 había tomado conocimiento del daño ocasionado al Fisco, sin que hubiesen revisado la totalidad del período auditado, ni mucho menos ejercido las acciones de cobro. Y aunque, diversos testigos pertenecientes al órgano contralor dieron cuenta de que, o bien en ese momento no era parte de sus funciones, o bien simplemente no lo advirtieron, lo cierto es que no consideraron que estos hechos revistieran carácter de delito, por lo que no denunciaron al Ministerio Público, bastándoles solo el recupero de los fondos, todo lo cual no obsta a que hayan conocido de estos hechos, más cuando a la época -2011- no existía una razón legal para abstenerse de denunciar, sino que simplemente según señalaron, existían criterios distintos a los de hoy, lo cual no es óbice para considerar que de todas maneras se tuvo conocimiento a esa época del perjuicio que hoy se demanda.

Por todo lo expuesto, considerando que el daño se produjo -en el mejor de los casos para la demandante- en el año 2011, habiendo tomado conocimiento de ello coetáneamente, sin que se hubiese iniciado una acción penal con la consecuente acción indemnizatoria dentro del plazo de 4 años previsto en el artículo 2314 del Código Civil, no queda más que concluir que encontrándose prescrita la acción civil deducida, ha de negarse lugar a la demanda civil intentada.

**Conforme todo lo razonado y las normas legales citadas, se declara:**

**I.-** Que se condena al acusado **Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel** como **autor** del delito de **Malversación de Caudales Públicos**, previsto y sancionado en el artículo 233 N° 3 en relación con la parte final del artículo 238, en grado de **consumado** cometido en esta ciudad, durante los años 2010 y 2011.

**II.-** Que se condena a la acusada **Marcela Alejandra Cuevas Muñoz** como **cómplice** del delito de **Malversación de Caudales Públicos**, previsto y sancionado en el artículo 233 N° 3 en relación con la parte final del artículo

238, en grado de **consumado** cometido en esta ciudad durante los años 2010 y 2011.

**III.-** Que se rechaza la demanda civil interpuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado, en contra de los demandados Eduardo Gordon Valcárcel y Marcela Cuevas Muñoz.

La sentencia será redactada por la Magistrado Patricia Bründl Riumalló y será comunicará a los intervinientes el día 22 de noviembre de 2024 a las 11:30 horas, quedando desde ya todos los intervinientes citados a la audiencia correspondiente, sin perjuicio de que dicha fecha pueda modificarse, lo que de ocurrir será oportunamente notificado a los intervinientes.

**RIT: 148-2023**

**RUC: 1700788230-0**

**PRONUNCIADO POR ESTA SALA DEL CUARTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LOS JUECES ERICK ARAVENA IBARRA, MAURICIO OLAVE ASTORGA Y PATRICIA BRÜNDL RIUMALLÓ.**